

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente

APELACIÓN AUTO	
DEMANDANTE	MARTHA LUCÍA ECHEVERRI ZAPATA
DEMANDADOS	COLPENSIONES- PORVENIR
RADICADO	05001-31-05-002-2022-00453-01
TEMA	Mandamiento de pago- Intereses moratorios
DECISIÓN	Confirma

Medellín, treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso ejecutivo, promovido por la señora **MARTHA LUCÍA ECHEVERRI ZAPATA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** y la **AFP PORVENIR S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 036**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.-ANTECEDENTES

Mediante proceso ordinario laboral la señora MARTHA LUCÍA ECHEVERRI ZAPATA, solicitó que se declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por PORVENIR S.A., así como la validez sin solución de continuidad de su afiliación a COLPENSIONES y la responsabilidad que ambas entidades tienen en la causación de perjuicios materiales y morales a la demandante y que, en consecuencia, i) se condene a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES todo el saldo de su cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados, incluyendo gastos de administración y comisiones descontadas; ii) que se condene a COLPENSIONES a recibir dichas sumas, activar la afiliación de la demandante y pagarle la **pensión de vejez** retroactivamente desde el 15 de noviembre de 2019 con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y; iii) los perjuicios morales y materiales, así como las costas procesales del juicio.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 06 de octubre de 2021, accedió a las pretensiones imploradas y ordenó lo siguiente (PDF 16):

“PRIMERO: DECLARAR la INEFICACIA del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad efectuado por la señora MARTHA LUCÍA ECHEVERRI ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía No.43.045.100
SEGUNDO: CONDENAR a PORVEIR S.A., trasladar a la accionante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones, trasladando a dicha entidad dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, todos los recursos de la cuenta de ahorro individual de los mismos, incluyendo, las comisiones de administración, cuotas de seguros previsionales y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES, a reactivar la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que administra, sin solución de continuidad y recibir todos los dineros que le sean trasladados por la administradora demandada, realizando la respectiva actualización de la historia laboral.
CUARTO: DECLARAR que le asiste el derecho al reconocimiento de pensión de vejez, en favor de MARTHA LUCÍA ECHEVERRI ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía No.43.045.100, a partir del 15 de noviembre de 2019 y a cargo de COLPENSIONES.
QUINTO: RECONOCER retroactivo pensional en favor de la señora MARTHA LUCÍA ECHEVERRI ZAPATA, a partir del 1 de octubre de 2020 y que, liquidado hasta el 30 de septiembre de 2021, asciende a la suma de \$26.598.971, a partir del mes de octubre de 2021, la mesada a cargo de COLPENSIONES es de \$2.225.936. De igual manera se autoriza el

descuento respecto de los aportes en salud como se expuso en las consideraciones

SEXTO: RECONOCER el derecho a la indexación sobre las mesadas causadas hasta el momento en que se realice efectivamente el pago.

SEPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por lo expuesto en las consideraciones.

OCTAVO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito por lo expuesto en las consideraciones.

NOVENO: CONDENA en costas a PORVENIR S.A, de las que se fijan agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV. Sin costas a cargo de COLPENSIONES. La presente decisión se notifica por ESTRADOS.

En sentencia de segunda instancia, de fecha 25 de febrero de 2022, proferida por este Tribunal, con ponencia de la titular de este despacho, se dispuso: (PDF 18)

“PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio del 6 de octubre de 2021, que resolvió excepción previa de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia, y CONDENAR en costas procesales a PORVENIR S.A. en favor de la señora MARTA LUCIA ECHEVERRI ZAPATA en la suma de 1 salario mínimo legal mensual vigente para 2022, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: ADICIONAR el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia de fecha y procedencia conocidas que se conoce en Apelación y Consulta, a efectos de ORDENAR a PORVENIR S.A., que traslade a COLPENSIONES, debidamente discriminadas, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen los rubros trasladados, y calcular y pagar, al momento del traslado, la indexación de las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes de garantía de pensión mínima, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

*TERCERO: MODIFICAR el numeral 5º de la parte resolutive de esa misma sentencia, en cuanto al valor del retroactivo pensional reconocido y la mesada ordenada continuar pagando, para en su lugar ORDENAR a COLPENSIONES pagar a la demandante la suma de treinta y ocho millones cuarenta mil trescientos sesenta y ocho pesos (\$38.040.368), comprendido entre el 1º de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2022 y, a partir del 1º de febrero de 2022 continuar pagándole a la actora una mesada pensional por valor de \$2.233.015, sobre 13 mesadas pensionales al año, manteniéndose incólume la orden de realizar los descuentos sobre el retroactivo adeudado con destino al sistema de salud, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. CUARTO: **CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.***

QUINTO: ABSTENERSE de imponer costas procesales en esta instancia respecto a las apelaciones contra la sentencia, sin perjuicio de las ya impuestas a PORVENIR S.A. frente a la desventura de la excepción previa resuelta, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia”.

En proveído del 31 de marzo de 2022, el A quo, emitió auto de cúmplase lo resuelto por este Tribunal y ordenó liquidar las costas procesales del proceso a favor de la demandante y a cargo de la AFP PORVENIR en la suma de \$1.908.528, las cuales fueron aprobadas en auto de la misma fecha. (PDF 19)

La parte demandante el 28 de septiembre de 2022, planteó **demanda ejecutiva conexa** del proceso ordinario laboral, planteando las siguientes pretensiones: (PDF 23)

“PRIMERA: *Sírvase señor juez librar mandamiento de pago con base en la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral radicado 05001310500220210021100, en contra de las ejecutadas y a favor de la ejecutante, así:*

A cargo de PORVENIR por la obligación de hacer así:

CONDENAR a PORVEIR S.A., trasladar a la accionante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones, trasladando a dicha entidad dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, todos los recursos de la cuenta de ahorro individual de los mismos, incluyendo, las comisiones de administración, cuotas de seguros previsionales y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

ADICIONAR el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia de fecha y procedencia conocidas que se conoce en Apelación y Consulta, a efectos de ORDENAR a PORVENIR S.A., que traslade a COLPENSIONES, debidamente discriminadas, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen los rubros trasladados, y calcular y pagar, al momento del traslado, la indexación de las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes de garantía de pensión mínima, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

A cargo de COLPENSIONES por la obligación de hacer así:

ORDENAR a COLPENSIONES, a reactivar la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que administra, sin solución de continuidad y recibir todos los dineros que le sean trasladados por la administradora demandada, realizando la respectiva actualización de la historia laboral.

SEGUNDA: *Sírvase librar mandamiento de pago por las mesadas causadas y no pagadas comprendidas entre el 01 de febrero de 2022 y el 31 de agosto de 2022, así: A cargo de COLPENSIONES: • La suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$38.040.368) que corresponde a las mesadas comprendidas entre el 01 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2022 con su correspondiente indexación.*

TERCERA: *Sírvase librar mandamiento de pago por las mesadas causadas y no pagadas comprendidas entre el 01 de febrero de 2022 y el 31 de agosto de 2022, así: A cargo de COLPENSIONES • La suma de*

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS (\$15.631.105)

CUARTA: *Sírvase librar mandamiento de pago en contra de Colpensiones por los intereses moratorios sobre la suma de \$38.040.368 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.617 del Código Civil, causados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de 30 días concedidos por el juzgador y posteriores a la ejecutoria y hasta que se haga efectivo el pago.*

QUINTA: *Sírvase librar mandamiento de pago en contra de Colpensiones por los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre cada una de las mesadas causadas y no pagadas entre el 01 de febrero de 2022 las que en lo sucesivo se causen y hasta que se haga efectivo el pago.*

(sic)

QUINTA: *Sírvase librar mandamiento por las costas procesales causadas en el presente proceso.*

Mediante auto del 04 de octubre de 2022, se libró **mandamiento ejecutivo**, a través del cual se ordenó: (PDF 25)

*“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO POR LA OBLIGACION DE HACER a favor de la señora Marta Lucia Echeverri Zapata con cédula de ciudadanía No. 43.045.100 en contra de **PORVENIR S.A.** y ORDENAR a trasladar a la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES todos los valores que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante y demás conceptos que se dispusieron en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado entre las partes. Para el efecto se le concede un término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Así mismo, ORDENAR a COLPENSIONES que, dentro del mismo término, reactive y actualice la historia laboral de la ejecutante. (art. 433-1 del C.G.P.).*

SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO POR LA OBLIGACION DE HACER en contra de COLPENSIONES y a favor de la señora Marta Lucia Echeverri Zapata, y ORDENAR a la entidad demanda a reconocer la pensión de vejez a favor de la demandante, a partir del 15 de noviembre de 2019 y el retroactivo pensional a partir del 1º de octubre de 2020 hasta el 31 de enero de 2022 por la suma de \$38.040.368 , y reconocer a la demandante partir del 1º de febrero de 2022 una mesada pensional por valor de \$2.233.015 sobre trece mesadas al año, autorizando el descuento con destino al sistema de salud.

TERCERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO POR LA OBLIGACION DE DAR a favor de la señora Marta Lucia Echeverri Zapata en contra de COLPENSIONES, y a reconocer la indexación sobre las mesadas causadas hasta el momento en que se realice efectivamente el pago.

CUARTO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas causadas y no pagadas entre el 01 de febrero de 2022 y el 31 de agosto de 2022, y

las que en lo sucesivo se causen y hasta que se haga efectivo el pago.

QUINTO: ORDENAR la entrega del título judicial No. 413230003876664 por valor de \$1.908.526 que corresponden a las costas procesales del proceso ordinario que adeuda la demandada a la parte ejecutante. Se requiere al apoderado judicial, con el fin de que allegue copia de la cédula de ciudadanía, e indiquen si autorizan el pago de los mismos por el Banco Agrario de Colombia o, en una cuenta personal de otra Corporación donde le cobraran los gastos administrativos, de acuerdo a la CIRCULARPCSJC20-17 del 29/04/2020 expedida por el C.S. de la J. Asimismo, el certificado de la cuenta a consignar y el correo electrónico.

SEXTO: NEGAR EL MANDAMIENTO DE PAGO por los intereses legales sobre el retroactivo pensional comprendido entre el 1º de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2022, conforme lo expuesto en la parte considerativa.

SÉPTIMO: OFICIAR a BANCOLOMBIA con el fin de que certifique las entidades financieras y cuentas Bancarias que figuran a nombre de COLPENSIONES, NIT 900.336.004-7 que no estén cobijadas por concepto de inembargabilidad.

OCTAVO: Las costas procesales se resolverán en la oportunidad procesal. NOTIFICAR esta Providencia a la entidad ejecutada en forma personal y adviértase que dispone del término de cinco (5) días para el pago de la obligación y diez (10) para proponer medios de defensa que a bien tenga.

Admitida la demanda, y encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, COLPENSIONES dio respuesta oportuna al libelo genitor, a través de su apoderado judicial, según se advierte en el archivo PDF N° 34 del expediente digital, y planteó a título de excepciones de mérito: “PRESCRIPCIÓN, PAGO, COMPENSACIÓN”

Por su parte, la AFP PORVENIR, si bien no planteó excepciones frente al mandamiento ejecutivo, en escrito visible en el PDF 49, adjuntó soporte de traslado de los aportes de la cuenta de ahorro individual de la demandante a Colpensiones.

Ahora bien, en auto del 11 de enero de 2023, el A quo puso en conocimiento de la demandante, la Resolución SUB 326381 del 29 de noviembre de 2022 emitida por COLPENSIONES (anexo 37 E.D.), mediante la cual la demandada le reconoce pensión de vejez a la señora ECHEVERRI ZAPATA. (PDF 39-43)

En relación al requerimiento, la demandante en memorial del 17 de enero de 2023 informó al despacho de primera instancia que Colpensiones notificó a la actora, el 14 de diciembre de 2022, la resolución de SUB 326381, por medio de la cual se le reconoce pensión, sin embargo precisó la apoderada judicial, que la entidad administradora de pensiones ha desconocido la orden impartida dentro del proceso ejecutivo que corresponden a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, sobre las mesadas causadas y no pagadas. (PDF 50)

II. DECISION DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA

En la audiencia de conciliación obligatoria, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, y decreto de pruebas, celebrada el 13 de junio de 2023, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín – Ant., adoptó **medida de saneamiento**, dejando sin efectos la **orden de mandamiento de pago por los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993**.

Como fundamento de su decisión, consideró el juez de primer grado que, el proceso ejecutivo conexo deviene precedido de una sentencia judicial que se encuentra en firme y ejecutoriada y que, por tanto, el juez ésta compelido a realizar un control de legalidad a un de oficio. Que, revisado el mandamiento ejecutivo, se advierte orden de pago respecto de los intereses moratorios a que se refiere el art. 141 de la ley 100 de 1993, no obstante, este concepto fue expresamente negado por el juez de primera instancia y confirmada su decisión, en sede de segunda instancia, por lo que el despacho no debió librar orden de apremio por este concepto, señalando a su vez que, tal error no genera derecho, pues los autos ilegales no atan al juez

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La referida decisión fue recurrida en reposición y en subsidio de apelación por la apoderada de la parte demandante, quien manifestó que, pese a que en la sentencia del proceso ordinario laboral, no se reconoció los intereses moratorios pretendidos, ello no es impedimento para que se reconozcan en el mandamiento ejecutivo, teniendo en cuenta que las demandadas han incurrido en mora, toda vez que, la sentencia de segunda instancia, quedó ejecutoriada desde marzo de 2022, y a partir de ese momento, debían cumplir con la obligación que emanaba

de la orden judicial, no obstante, se debió impetrar esta demanda ejecutiva, agregando que, en todo caso, el mandamiento de pago, no fue objeto de recurso por las demandadas, por lo que el mismo debe mantenerse incólume.

El A quo, no repuso la decisión, argumentando que, el proceso ejecutivo parte de la certeza de la existencia de un título que no es otra que ordenar la ejecución por los conceptos que emanan de las sentencias declarativas de primera y segunda instancia.

Alegatos de conclusión:

El apoderado judicial de la **parte demandante** dijo que sobre las mesadas causadas entre el 01 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2022, (mesadas liquidadas en la sentencia) no se solicitaron los intereses del artículo 141 pues en ello tiene razón el señor juez, en el sentido de que no podían ser solicitados, mucho menos concedidos, razón por la cual, respecto del retroactivo **allí causado se solicitaron los intereses consagrados en el artículo 1617 del C.C, pues ellos aluden a una indemnización de perjuicios por la mora en la obligación de pagar una cantidad de dinero; sin embargo, estos fueron negados desde el mandamiento de pago, decisión aceptada y que no fue recurrida.**

No obstante, expuso que, luego de estar ejecutoriada la decisión y existir obligación actual expresa y exigible para Colpensiones de pagar la pensión, a la fecha de presentación del ejecutivo, **si se encontraba en retardo y mora de pagar las mesadas y, por tanto, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993**, propios del sistema pensional, son procedentes.

Por su parte, la **apoderada de COLPENSIONES**, pidió que se confirme la decisión adoptada, argumentando que, el mandamiento de pago debe encontrar su respaldo en la sentencia impuesta en el proceso ordinario a Colpensiones, ya que esta constituye el título ejecutivo, y no se evidencia el hecho de que en la sentencia base de ejecución se impusiera la obligación a COLPENSIONESE.I.C.E. de cancelar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 reclamados por la parte demandante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La cuestión jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe estrictamente a la apelación presentada a instancias de la parte demandada, en contra del auto interlocutorio dictado por el *A Quo*, el 13 de junio de 2023, a través del cual, se dejó sin efectos, la orden de mandamiento de pago por los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993.

Dicha providencia, es apelable, conforme lo establece el numeral 8º del artículo 65 del CPT y SS., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001.

Para zanjar le problema jurídico es preciso indicar que, antes de librar el mandamiento de pago, el administrador de justicia debe realizar un análisis de la factibilidad de la ejecución, tal como lo señalan los artículos 100 del CPT y de la Seguridad Social y 422 del Código General del Proceso, este último por aplicación analógica permitida por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

“ARTICULO 100 CPT y SS. PROCEDENCIA DE LA EJECUCIÓN. *Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, **que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante** o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.*

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso.”

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. *Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”*

De lo anterior deviene concluir entonces que, en el proceso ejecutivo conexo, el grado de semejanza que debe existir entre la parte resolutive de la sentencia ordinaria y la orden judicial de ejecución, es absoluta.

Tal exactitud funge como garantía de que la ejecución solo se adelantará por las obligaciones claras, expresas y exigibles que fueron impuestas en la sentencia resultante del proceso ordinario. Así, de un lado el título ejecutivo funge como garantía crediticia para el acreedor, ya que el mismo incorpora los derechos precisos que pueden hacerse exigibles por la vía ejecutiva, sin que pueda interpretarse con alcance restringido lo esencialmente contenido en el mismo; y al mismo tiempo, este comporta garantía para el deudor, quien conforme a la incorporación precisa y exacta del derecho, no podrá ser perseguido en sus bienes y eventualmente ejecutado en un juicio, por ninguna obligación o importe que no contenga el propio documento.

Ello por cuanto, la fuerza de ejecutividad patrimonial del título ejecutivo (sentencia ordinaria) en contra del deudor (vencido en juicio en el proceso ordinario), no alcanza a comprender una nueva disputa de orden social.

Ir más allá de las obligaciones contenidas en la sentencia ordinaria, indudablemente significaría desbordar el alcance del crédito que contiene la providencia, y evidentemente ese ir más allá situaría al sujeto de derechos en el escenario del proceso ordinario, y no del juicio ejecutivo.

Conforme a la jurisprudencia nacional, el *“que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta”* (Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero Ponente Dr. Ricardo Hoyos Duque, radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436)).

Ahora bien, y respecto de los **intereses moratorios**, debe indicarse que los mismos tienen su consagración o fundamento legal en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago.”

La citada normativa deja en claro, que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social en pensiones, están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los pensionados y a aquellos beneficiarios a quienes se les hubiere reconocido su derecho prestacional por fuera de los plazos establecidos para las diferentes contingencias, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales, en aplicación del artículo 53 Superior.

La procedencia de los intereses moratorios ha sido un tema sobre el cual se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades, memorándose para ello la sentencia SL-33761 del 31 de marzo de 2009, reiterada luego en providencias más recientes como la SL-2587 de 2019 y la SL-658 de 2020, en la primera de estas providencias se adoctrinó lo siguiente:

“...Corresponde agregar que la finalidad del artículo 141 de la Ley 100 fue afianzar el carácter vital de la pensión, propender por su pronto pago y proteger a los pensionados, disuadiendo las dilaciones en su trámite y por ello los intereses moratorios antes que ser una sanción para la entidad obligada, son una medida resarcitoria en el caso del no pago oportuno de la mesada, y por lo mismo hay que entender que se causan desde el momento en que debe hacerse el pago y no se realiza...”

Sobre este tema la CSJ en SL2772-2021, adoctrinó:

“Adicionalmente, la Sala ha referido que los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no tienen carácter sancionatorio sino resarcitorio, pues proceden a fin de aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la tardanza del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, con independencia de las razones que se aduzcan en sede administrativa.

Sin embargo, esta no es una regla absoluta, en tanto la Corte ha reconocido supuestos en los cuales no cabe una condena por tal concepto, porque la negativa se encuentra plenamente justificada (CSJ SL704-2013). El primero, cuando en sede administrativa hay controversia legítima entre potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (CSJ SL14528-2014). Y, el segundo, cuando la actuación de la administradora estuvo amparada en el ordenamiento legal vigente al momento en que se surtió la reclamación, y después se reconoce la pensión en sede judicial con base en criterios de origen jurisprudencial (CSJ SL787-2013”).
(Subraya fuera del texto).

CASO CONCRETO

Le corresponde a la Sala determinar si se mantiene o no, la decisión del A quo que dejó sin efectos, la orden de mandamiento de pago por los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993.

Pues bien, lo primero que resalta esta Sala es que la finalidad del proceso ejecutivo, no es otra distinta que la de obtener la plena satisfacción de una prestación u obligación a favor del demandante y a cargo del demandado; al tratarse de una pretensión cierta pero insatisfecha, que se caracteriza porque no se agota sino con el pago total de la obligación.

En lo que interesa al recurso, debe preciarse que, en la demanda la parte actora solicitó tanto intereses legales, como intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, así:

*“CUARTA: Sírvase librar mandamiento de pago en contra de Colpensiones por los **intereses moratorios** sobre la suma de \$38.040.368 de conformidad con lo dispuesto **en el artículo 1.617 del Código Civil**, causados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de 30 días concedidos por el juzgador y posteriores a la ejecutoria y hasta que se haga efectivo el pago.*

*QUINTA: Sírvase librar mandamiento de pago en contra de Colpensiones por los **intereses moratorios** de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre cada una de las mesadas causadas y no pagadas entre el 01 de febrero de 2022 las que en lo sucesivo se causen y hasta que el se haga efectivo el pago”*

Del contenido del artículo 1617 del C. Civil, es claro que la obligación de pago de intereses opera por ministerio de la ley, y por ende no se requiere que la misma se encuentre contenida en una sentencia o un documento que haga las veces de título ejecutivo, pues la referida normativa es aplicable no solo a casos

en los cuales exista un acuerdo de voluntades y mora por parte de los contratantes, sino en general a situaciones en que existan obligaciones e incumplimiento de las mismas por parte del acreedor.

Huelga decir, que en este asunto solo son objeto de controversia los intereses moratorios a que se refiere el artículo 141 de la ley 100 de 1993, los cuales no se presumen y no son de aplicación automática.

Ahora bien, y como quiera que el proceso ejecutivo conexo se ejecuta la orden judicial que emerge de las sentencias de primera y segunda instancia, debe señalarse que, en dichas providencias, **se negó expresamente el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993**, indicándose en el fallo de segunda instancia lo siguiente:

En consecuencia, **confirmará** este colegiado la absolución a COLPENSIONES de la condena a perjuicios e intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, en atención a que COLPENSIONES no ha incurrido en mora en el reconocimiento de la pensión de la demandante.

El juez de primer grado, negó los intereses legales y libró mandamiento de pago por los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas causadas y no pagadas entre el **01 de febrero de 2022 y el 31 de agosto de 2022, y las que en lo sucesivo se causen y hasta que se haga efectivo el pago.**

Puntualmente, en el mandamiento ejecutivo el A quo, arguyó que la indexación e intereses legales sobre el retroactivo pensional comprendido entre el 01 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2022 por valor de \$38.040.368, son pretensiones excluyentes entre sí, ya que los intereses moratorios y la indexación tienen una finalidad dual, la primera procura resarcir el daño al beneficiario de la pensión por la tardanza en el reconocimiento y pago de la mesada y la segunda, trae implícita la corrección monetaria por la devaluación monetaria que afecta el patrimonio del interesado, de donde se desprende que las dos pretensiones buscan la corrección monetaria y no sea posible reconocer las dos. En razón a lo anterior, absolvió de la pretensión en cuanto a los **intereses legales**, y en

cambio, concedió la indexación sobre la condena de \$38.040.368, hasta el momento en que se realice efectivamente el pago total de la obligación, aspecto que no fue objeto de recurso por ninguna de las partes.

En suma, y de acuerdo a lo que viene de indicarse, al juez de instancia estaba impedido a librar mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, respecto de las mesadas causadas a partir el 01 de febrero de 2022, y las que en lo sucesivo se causen y hasta el efectivo de la obligación, **considerando que, respecto de las mismas, en las sentencias declarativas que son materia de ejecución no se ordenó su reconocimiento.**

Visto lo anterior, estima la Sala que el juez está facultado para adoptar las medidas de saneamiento y control de legalidad que estime pertinente, y que pese a que no hubiese sido objeto de apelación el auto que libró mandamiento de pago por las demandadas y en particular por Colpensiones, ello no es óbice para que el director del proceso, realice el control de legalidad, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 42 y 132 de CGP.

Corolario de todo lo anterior, se CONFIRMARÁ lo resuelto en primera instancia, en cuanto dejó sin efectos la orden de mandamiento de pago por los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la improsperidad del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte ejecutante, las costas procesales en esta instancia estarán a cargo de dicha parte y a favor de las codemandadas, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$200.000, que deberá pagar a cada una de las partes.

V. DECISIÓN

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

RESUELVE

Primero: CONFIRMAR el auto interlocutorio objeto de apelación de fecha 13 de junio de 2023, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito

de Medellín, en cuanto dejó sin efectos la orden de mandamiento de pago por los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, según lo expuesto en precedencia.

Segundo: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte ejecutante y en favor de la parte ejecutada COLPENSIONES y PORVENIR, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$200.000, que pagará la demandante a cada uno de las codemandadas.

Tercero: Se ordena notificar lo resuelto en **ESTADOS** virtuales y la devolución del expediente al juzgado de origen.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
ESTADOS

N ° 151 del 31 de Agosto de 2023.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>.